Globethics Repository



Bolivia [Bolivia]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Cajías, Lupe
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-12 09:32:06
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220011

NUEVA SOCIEDAD NRO.134 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1994 , PP. 4-10

Bolivia. La democracia se profundiza

Cajías, Lupe

Lupe Cajías: Periodista e historiadora boliviana, autora de varios libros sobre historia contemporánea.

Bolivia se ha convertido en un país aburrido para los periodistas. Los cambios en el Palacio de Gobierno transcurren con abrazos y al son de bandas de música. Las marchas sindicales no terminan con muertos en las calles. No hay guerrillas ni paramilitares. Ni siquiera el tráfico de drogas provoca enfrentamientos sangrientos, interesantes, y no aparecen cárteles en Cochabamba o en Santa Cruz. Las grandes transformaciones se realizan mediante leyes y previas consultas multisectoriales. Los días pasan sin muchas sorpresas y por tanto el mundo noticioso no mira más hacia este país; el antiguo hijo pródigo de la región ahora se porta bien.

Sin embargo, Bolivia pasa por una etapa de profundos cambios que han cerrado definitivamente el ciclo abierto por la revolución nacionalista de 1952. El país decidió ser pionero en el Cono Sur en la recuperación de la democracia (1982) y luego ser el primero en aplicar un modelo de ajuste estructural en el marco democrático (1985). Ahora se esfuerza por ser país vanguardia en la atención a las demandas sociales, tan descuidadas por las dictaduras militares como por los gobiernos democráticos.

Un año de cambios

El 6 de agosto de 1993, por tercera vez consecutiva, un presidente constitucional, Jaime Paz Zamora, entregaba el poder a su sucesor elegido en las urnas, Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo gobierno había sido electo por una amplia mayoría, superior en 14 puntos a su inmediato sucesor, y representaba a una amplia coalición: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTK-L), el Movimiento Bolivia Libre (MBL) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS), apoyados por un abanico de empresarios independientes y de jóvenes profesionales. El margen permitió una rápida elección en el Congreso, a la inversa de 1989 cuando Sánchez de Lozada ganó en las urnas pero perdió en la elección constitucional.

Sánchez de Lozada - «Goni» - licenciado en filosofía, cineasta y uno de los más ricos empresarios mineros de Bolivia, cobró vigencia política sólo hace tres lustros cuando encabezó una negociación entre militares y civiles durante el golpe militar de 1979. Pero en 1985, su figura logró proyección nacional por ser el artífice de la aplicación del modelo neoliberal y bajar una inflación de 23.000% al 10%. Como ministro de Planeamiento logró estabilizar la economía nacional y heredar al futuro indicadores positivos: baja inflación (9% en 1993) y crecimiento del 4% promedio. La confianza en la economía nacional se refleja en rubros como los depósitos del sector privado que en 10 años han pasado de 69 a 2.053 millones de dólares; o las reservas en moneda extranjera que desde 1985 se han duplicado a 370,9 millones de dólares y la baja en el déficit fiscal.

No sólo modernizó su partido, cabeza de la revolución de 1952, sino que lanzó una novedosa estrategia. Su alianza con el MRTK-L permitió que por primera vez en la historia nacional y latinoamericana, asuma como vicepresidente un aymara, Víctor Hugo Cárdenas, un componente que da un rostro diferente a Bolivia en comparación con otras naciones con similares mayorías indígenas. Sánchez de Lozada se autodenomina «neoliberal socialista», pues en su plataforma de trabajo propuso un plan para la incorporación de las bases como sujetos de propuestas y decisiones políticas y administrativas, y una estrategia para mejorar la distribución de la riqueza. El gobierno de «Goni» empezó con gran expectativa y la esperanza de cambio. Pero a un año de ese inicio auspicioso, las promesas no dan todos sus frutos.

Modernización del aparato estatal

El primer cambio fue a la vez el primer tropezón. El gobierno empezó a trabajar reestructurando el poder ejecutivo, rebajando de 18 a 10 los ministerios, agrupándolos bajo tres grandes áreas: Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Humano y Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el primero de su tipo en Latinoamérica. La nueva estructura se completó con una secretaría especial para la capitalización. La medida era necesaria para adecuar una vieja maquinaria estatal a las nuevas necesidades. Pero su aplicación tuvo una serie de vallas: el despido de 7.000 funcionarios públicos creó el primer conflicto social del régimen y deterioró la confianza en su promesa de crear más empleos. La falta de empleo fijo es uno de los más grandes problemas que arrastra la Bolivia democrática.

La ausencia de antiguos trabajadores, dejó sin memoria a muchas instituciones gubernamentales y durante meses no arrancaba el mecanismo de esas tareas cotidianas, pequeñas, que mueven al aparato estatal. Los organigramas no terminaban de ajustarse y hubo contradicciones y repeticiones. El caso extremo es el del antiguo Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios que quedó como una secretaría nacional, a pesar de que Bolivia es un país fundamentalmente agrícola. La subsecretaría de desarrollo alternativo (a los cultivos de coca) pasó a depender del Ministerio de Gobierno dándole un sesgo represivo, y otras dependencias simplemente desaparecieron creando el subsiguiente desconcierto.

En un primer momento, dos de los tres «superministerios» estaban en manos de grandes empresarios privados independientes y ello provocó, desde un inicio, roces con las bases movimientistas, el mayor partido de la coalición gobernante. También desde un primer momento, uno de los socios, Max Fernández de la UCS, se convirtió en el mayor crítico del régimen. Las quejas, casi rabietas de Max, son periódicas y se mantienen como esa famosa espada sobre la cabeza de la alianza oficialista. Aunque sólo tiene un ministerio, los votos ucesistas en el parlamento son imprescindibles y el gobierno debe atragantarse con cada declaración del neófito político.

En contrapartida, el gobierno ha empleado a técnicos, muchos de ellos de las filas izquierdistas. Dirigentes y militantes de antiguos partidos contestatarios, como del Partido Socialista o del Partido Comunista e incluso del desaparecido Ejército de Liberación Nacional tienen puestos claves en el Ministerio de Desarrollo Humano y en las asesorías. La «inteligentzia » ha sido cooptada por el gobierno y esto se refleja en la falta de análisis críticos sobre la realidad. La personalidad carismática de «Goni», la figura simbólica de Cárdenas, luchador por las causas indígenas, y la presencia como canciller del izquierdista Antonio Araníbar, permiten al gobierno tener un sólido puente de contacto con los tradicionales sectores cuestionadores. Al mismo tiempo, la pertenencia de «Goni» a la alta oligarquía nacional, y la participación en el Ejecutivo de representantes de la empresa privada neutralizan a ese sector. Alguien ya escribió que en el actual gobierno está incluido todo el abanico social del país.

Al frente queda una oposición debilitada, que apenas tiene espacio para actuar dentro del Congreso. La corrupción ha terminado de descomponer y enterrar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) quinto en las últimas elecciones municipales. Su líder histórico, Jaime Paz, debió renunciar a la actividad política ante las evidencias de relaciones de él y de su entorno con acusados de

narcotráfico. Acción Democrática Nacionalista (ADN) no sale de su depresión después de su derrota electoral y el retiro de su jefe Hugo Banzer, dictador en los años 70, quien no materializó su reivindicación histórica de llegar a la presidencia a través del apoyo electoral. Conciencia de Patria (CONDEPA) no consigue salir de su estrecho ámbito de acción, el Altiplano (en el occidente del país), y ha retrocedido inclusive en su otrora plaza fuerte: La Paz. En el último año sufrió profundas divisiones. La izquierda perdió hasta su personería jurídica por no tener votos suficientes. Pero también carece de personalidad y sus banderas han sido arrebatadas por el programa del gobierno. Los partidos políticos parecen los más retardados en esta etapa de modernización estatal.

Capitalizar y no privatizar

Una de las primeras y más riesgosas medidas del gobierno es la Ley de Capitalización, con la cual pretende crear 70.000 empleos anuales y duplicar los capitales de las seis empresas estatales más importantes. La propuesta de «capitalización» surgió como alternativa a los frustrados planes de privatización. Igual que en otros países del continente, los programas privatizadores diseñados por los organismos internacionales han encontrado fuerte resistencia entre los sindicatos y organizaciones de base. El gobierno anterior no pudo cumplir su promesa de «privatizar 10 empresas por día». Sánchez de Lozada asegura que en su campaña electoral aprendió a respetar la percepción de los trabajadores que se sienten propietarios de esas empresas, fruto de largas luchas. La capitalización electoral dividía las acciones en 51% para el pueblo boliviano y en 49% para los inversores privados. La ley aprobó 50-50, incumpliendo la promesa anterior. La capitalización, teóricamente, es la asociación entre una empresa pública, que no se vende sino que aporta sus activos, y un inversionista estratégico que aporta igual o menor monto en capital fresco, creando una sociedad anónima. Pueden ser uno o varios inversionistas que sólo dan capital para la reactivación de la empresa. En una segunda fase, la otra mitad de las acciones se reparten entre 3 millones de bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, permitiéndoles además abrir una libreta de seguridad social.

El original programa ha sido respaldado por los organismos internacionales y despertó interés en inversionistas extranjeros, pero aún está muy retrasado en su reglamentación. Quedan flotando varias dudas, sobre todo en la parte operativa y administrativa. Para analistas opositores, la capitalización será sólo una mala privatización. El reparto de las 3 millones de acciones y sus mecanismos de ajuste y cobro son otro tema aún oscuro. Las empresas que están preparándose para ser

capitalizadas son: telecomunicaciones, electricidad, ferrocarriles, fundiciones, petróleo y gas y la línea aérea nacional. El gobierno espera que el próximo año se inicie la recepción de capital fresco por lo menos en telecomunicaciones e hidrocarburos, y con ello iniciar la generación de empleos y otros efectos multiplicadores. Si su plan fracasa, el retroceso podría ser catastrófico pues la estabilidad en un país pobre como Bolivia es muy frágil y susceptible de retornar otra vez a procesos caóticos.

Participación popular

Pocas leyes de la República han sido tan respaldadas por tan diversos sectores de opinión y han tenido tantos padres adjudicándose la autoría. El espíritu de esta ley es la redistribución de la riqueza, repartiendo los fondos estatales a las organizaciones de base, estimulándolas para que sean ellas las que realicen por sí mismas lo que el Estado fue incapaz de darles, sobre todo educación y salud, saneamiento básico y otros.

La Ley reconoce personería jurídica a las juntas de vecinos de los barrios marginales, a las comunidades campesinas, a las organizaciones tradicionales de los pueblos originarios como el ayllu andino o la tenca guaraní y el cabildo amazónico, las cuales se agrupan en las organizaciones territoriales de base (OTBs). Municipaliza la división territorial y amplía las atribuciones de las alcaldías que reciben la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, riego y microrriego con la obligación de administrarla y mejorarla. Se distribuye el dinero hasta el último pueblo, descentralizando los recursos que antes se quedaban sólo en las capitales. Cada pueblo recibe fondos de acuerdo al número de habitantes. La ley prevé la creación de comités de vigilancia de los propios vecinos para la administración de esas cuentas. Es decir, las bases pasan a controlar en qué y cómo se gastan sus dineros. Asimismo, es la propia comunidad la que controla que el maestro rural cumpla con su trabajo o que el paramédico o médico provincial no burlen sus obligaciones.

Las comunidades diseñan sus propios proyectos, de acuerdo a lo que ellos estimen más urgente. Son susceptibles de recibir asesoramiento estatal para los mismos y también pueden recibir préstamos o créditos. La Ley de Participación Popular redefine las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Por eso, los sindicatos tradicionales se han sentido de alguna manera afectados en sus intereses aunque sus campos de acción sean diferentes. Pero, sobre todo los partidos políticos pierden motivaciones para mediar entre el pedido popular y Estado, clientelismo

que los alimentaba. Con la Ley, por ejemplo, pueblos que tenían un presupuesto de 3 pesos (sic), pasan a recibir más de 10.000. Un hecho histórico fue el reconocimiento jurídico a la organización de los guaraníes, que por un siglo lucharon por el respeto a sus propias instituciones. Teóricamente, la ley fomenta la autogestión y promueve que sean los mismos sujetos del desarrollo, quienes propongan y decidan qué les conviene. Sin embargo, la ejecución no será fácil. Los críticos aseguran que sólo se «democratizará» la corrupción o que las bases son incapaces de detectar sus propias necesidades. Otros afirman que el MNR copará las OTBs. En todo caso será un aprendizaje complicado. Su éxito consolidará el oficialismo, pero su fracaso puede no sólo afectar al gobierno sino la confianza en el sistema democrático pues es una última oportunidad para que la democracia ofrezca no sólo libertad, sino pan, salud y educación. Un dato preocupa a los analistas sociales: esta ley se originó «desde arriba» y no como parte de procesos sociales y por ello su implementación no es internalizada fácilmente en el «país real».

Reforma educativa

En cambio, la Ley de Reforma Educativa ha sido ampliamente discutida y analizada por todos los sectores involucrados, desde los sindicatos, la Iglesia Católica, los especialistas, las autoridades, etc. Todos coincidieron en la necesidad de la reforma, en un país que tiene el 25% de analfabetismo y casi el doble de analfabetismo funcional y cuyo Código de Educación tenía más de 30 años. La reforma tiene como objetivo declarado mejorar y ampliar la educación gratuita para que todos los bolivianos tengan acceso a ella. Un aspecto sustancial es la aplicación de la educación bilingüe en un país como Bolivia, con amplia mayoría de personas cuya lengua materna no es el español. El gobierno espera disminuir la deserción escolar si se enseña el español sobre la base de la lengua local. El vicepresidente Cárdenas es pedagogo y uno de los especialistas que más luchó en los últimos años por lograr una profunda reforma educativa, respetando las culturas regionales y las características de la realidad pluricultural y multiétnica de Bolivia. El presupuesto destinado a la educación se verá incrementado sustancialmente a partir de la aplicación de la reforma, priorizando el nivel primario. Organismos internacionales han dado amplio respaldo a la iniciativa que mejorará los recursos humanos.

Pero la ley incluye detalles rechazados por los sindicatos de maestros, dirigidos por trotskistas y famosos por su beligerancia. Por ejemplo, ya no es obligatorio el sindicalizarse para trabajar y tampoco el Estado seguirá descontando de las

planillas los aportes económicos a las federaciones gremiales. Esta actividad pasa a ser voluntaria y por tanto muchos dejarán de cumplirla con lo que se debilitarán las uniones del magisterio urbano y rural. Todo ciudadano que cumpla requisitos académicos puede ser director de un establecimiento escolar, con lo cual se elimina el privilegio de los egresados de las normales. Terminan también estructuras arcaicas que amparaban a roscas o grupo de maestros que se pasaban el poder más por razones políticas o amistosas que por méritos profesionales. Las universidades se han sentido también afectadas en su autonomía.

Por otra parte, la responsabilidad de controlar la educación pasa al municipio, a la comunidad. Muchos dudan de que todos los municipios estén en la capacidad de sacar adelante procesos educativos. Analistas locales comentan que los sindicatos más allá de su capacidad de resistencia y lucha reivindicativa inmediata han mostrado falta de adecuación para dar respuestas concretas a estas reformas. Por eso su lucha se circunscribe a la negación y se queda sin apoyo de la sociedad civil. Otras instituciones involucradas en desarrollo social o educación, como son las ONGs o las llamadas IPDS han estado ausentes en estas propuestas de cambio y con poco espacio para reflexionarlas, apoyarlas o criticarlas. El resultado es que la reforma educativa se implementa también «desde arriba» y con largo alcance, dejando de lado a quienes no sean capaces de asumirla.

Tierra y medio ambiente

Al mismo tiempo se lleva a cabo una transformación en la estructura de la tenencia de la tierra y el acceso a su uso. Bolivia fue el segundo país en dictar una reforma agraria (1953)después de México, antes de Cuba y con mayor profundidad que en otros países de la región. Sin embargo, la aplicación de esa reforma ya está agotada por defectos de nacimiento (minifundio, falta de acceso al crédito, agotamiento de suelos, etc.). Aunque políticamente cambió la situación de «indio» a ciudadano y se avanzó en algunos cambios sociales, 30 años después, la pobreza estructural en el campo no ha variado. Ultimos datos señalan que los campesinos bolivianos viven en pobreza extrema, bordeando la indigencia.

El gobierno anterior inició la intervención de las instituciones encargadas de dotar tierras, como reforma agraria y colonización. La etapa de ordenamiento está casi lista; muchos latifundios improductivos o ilegalmente entregados durante los gobiernos dictatoriales han sido recuperados por el Estado. Con el respaldo del Banco Mundial se prepara una nueva Ley de Tierras que modernice el área rural, respetando las tierras de comunidad y los territorios indígenas. Reordenar el agro

tiene además como objetivo secundario mantener población en el campo y en las ciudades intermedias. Paralelamente se discute en el Parlamento la aprobación en el tramo de la Ley Forestal, que regulariza el aprovechamiento de los bosques. Aunque Bolivia es conocida como país del Altiplano, la mayoría de su territorio está cubierto de floresta.

La creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente busca lograr el desarrollo integral del país, con crecimiento económico y equidad social. Este ministerio se constituye en el órgano rector de la planificación nacional y en instrumento destinado a diseñar la planificación estratégica del desarrollo. Se ocupa de la administración de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, el manejo integral de cuencas, el establecimiento de normas de control ambiental y el incentivo a los agentes económicos para conservar el ambiente. Bolivia está a tiempo de salvar su calidad ambiental pues no sufre los procesos catastróficos de naciones vecinas, como la situación por la que atraviesan Santiago de Chile o las grandes ciudades brasileñas. Pero, los industriales madereros han rechazado la Ley Forestal y sectores empresariales se quejan de lo que consideran obstáculos a sus inversiones.

Constitución y relaciones exteriores

Finalmente, con el apoyo de todos los partidos políticos, el Congreso Nacional ha modificado la Constitución Política del Estado de 1967, modernizándola. Un aporte esencial es el reconocimiento de que Bolivia es una nación pluricultural y multilingüe por lo cual toda ley y toda política debe respetar esa condición. Esto es considerado un triunfo de las luchas de los pueblos originarios. La mayoría de edad es ahora a los 18 años. Se creó el Ombudsman o Defensor del Pueblo y otras medidas administrativas. La promulgación de la nueva Carta Magna fue hecha en presencia de todos los jefes de partidos políticos.

La tranquilidad interna permite a Bolivia trazar por primera vez en su historia una política exterior de contactos, de «bisagra», aprovechando su situación geográfica de multiacceso a los subsistemas regionales. Este año, Bolivia y Paraguay cerraron el último capítulo de la Guerra del Chaco (1932) con sendas visitas presidenciales y el intercambio de trofeos de guerra. Bolivia medió en la disputa argentino-paraguaya sobre el río Pilcomayo permitiendo que se cree una comisión de trabajo para salvar a ese río, vital para los tres países. La actual administración continuó la iniciativa de la anterior para aprovechar el puerto de Ilo en Perú para convertirlo en puente con la región amazónica, inclusive con los estados brasileños

mediterráneos, hacia los mercados del Pacífico. Este proyecto tiene un interés internacional por lo que ha sido apoyado por el BID y el Banco Mundial.

Por primera vez en dos décadas, los presidentes de Bolivia y Chile mantienen buenas relaciones para lograr la integración económica y reestablecer relaciones diplomáticas. La negociación con Chile avanza en todos los aspectos no conflictivos para llegar a tratar posteriormente el problema marítimo, diferencia histórica entre ambos países desde la Guerra del Pacífico (1879). El país tiene actualmente buenas relaciones con todos sus vecinos, con EEUU, con Cuba y pertenece a los organismos subregionales. Es observador en el Mercado Común del Sur, Mercosur. Sin embargo, en la última etapa se descuidaron las relaciones con Europa, privilegiadas durante el gobierno del socialdemócrata Jaime Paz Zamora. Pero hay que remarcar que las principales relaciones exteriores de Bolivia son con EEUU y esas relaciones siguen «narcotizadas».

Coca-cocaína, el talón de Aquiles

Es justamente el tema del narcotráfico, fundamentalmente en el circuito coca-cocaína, el talón de Aquiles de la Bolivia democrática y también de este gobierno. El último régimen militar, encabezado por Luis García Meza, fue acusado internacionalmente de ser un gobierno «narcomilitar». Desde esa época (1980-82), las relaciones de Bolivia con EEUU y por tanto con la comunidad internacional tienen la sombra del narcotráfico.

Bolivia está clasificada como país «productor de materia prima» dentro de la nueva división del trabajo en la compleja red de la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, aunque en el país se den también los otros pasos. Las zonas en las estribaciones de la cordillera andina, conocidas como Yungas de La Paz y Chapare de Cochabamba son productoras de la hoja de coca, planta tradicional y hasta considerada «sagrada» por las culturas nativas. La coca es la materia prima de la cocaína.

Las plantaciones de coca se han expandido a zonas no tradicionales, fundamentalmente en el Chapare, por la demanda creada por el narcotráfico. Pero también por la desocupación urbana y por las características agrícolas propias de esta planta que soporta malos temporales, da tres cosechas al año, no se deteriora en su transporte y tiene mercado seguro. Este aspecto socioeconómico ha impedido tener un política antinarcóticos exitosa. En una primera etapa se ensayó la represión policial y militar con resultados desastrosos. Pero la otra vía, la de crear

cultivos alternativos, tampoco dio resultado ante la realidad del mercado internacional de las materias primas.

Obviamente, en los fracasos tiene mucho que ver la doble moral con la que se maneja en el mundo entero la lucha antinarcóticos. Informes internacionales aseguran que la coca boliviana, transformada en clorhidrato de cocaína, era el contacto usado por el cartel de Medellín para financiar a los contras nicaragüenses. Mientras se reprimía a los productores de coca, el responsable antinarcóticos, Rafael Otazo, se reunía en 1983 con el «rey de la coca» Roberto Suárez. Muchos analistas aseguran que el «Bolsín» donde se compra-venden los dólares en el Banco Central, era la «ventanilla negra» para captar los cocadólares, aporte económico decisivo para la estabilización económica (1986).

La caída estrepitosa en marzo de este año del ex-presidente Jaime Paz Zamora y de los principales dirigentes del MIR estuvo relacionada con el tráfico de cocaína. Durante su gobierno, la embajada estadounidense presionó para la salida de ministros, de jefes sectoriales y vetó a diputados y funcionarios. El tema del narcotráfico estuvo presente en un acuerdo secreto de ese gobierno y Washington (1990), así como en la llegada de tropas estadounidenses al área rural boliviana provocando interminables tensiones sociales y condenas legislativas. La certificación del «buen comportamiento» de Bolivia en la lucha antinarcóticos pesa para recibir apoyo en su balanza de pagos, para acceder a créditos internacionales, para negociar acuerdos, etc.

El nuevo gobierno llegó al poder con la misma carga, jaloneado por EEUU que quiere represión, incluso militarización, y erradicación en un 80% de los cultivos de coca, y por los campesinos (y sectores populares) que defienden la producción sin condiciones de la planta. Pero además, había el ingrediente de que la administración estadounidense no tenía clara su nueva estrategia antinarcóticos ante el fracaso mundial de la lucha. Por otra parte, el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada había manifestado anteriormente su simpatía por la legalización de las drogas pues toda «prohibición no da resultados». Sin embargo, en los primeros nueve meses, el gobierno se limitó a una represión casi por inercia, sin trazar una estrategia a largo plazo. Policialmente tuvo éxito en el apresamiento de varios cabecillas, inclusive la red que mantuvo relaciones con el MIR, y quebró estructuras de tráfico de clorhidrato en la selva amazónica. La problemática de los productores de coca se mantenía latente. Un operativo en la zona y la muerte de un campesino pisa coca, desencadenaron el enfrentamiento con el gobierno.

Se supo de las nuevas presiones de EEUU para la «Opción Cero», es decir, para la erradicación masiva de los cocales. Nuevos incidentes con miembros de la DEA, unidos a protestas globales de la Central Obrera Boliviana (COB) terminaron por crear un clima de convulsión social en septiembre de este año. Los cocaleros decidieron marchar hacia La Paz. Ni el apresamiento de sus dirigentes, ni juicios civiles, ni la represión detuvieron la movilización. Como resultado imprevisto, la marcha generó un gran debate nacional presidido por el propio presidente Sánchez de Lozada. Las veinte instituciones más representativas de la sociedad se pusieron de acuerdo para trazar una estrategia sobre el tema coca-cocaína en el corto, mediano y largo plazo.

Empresarios, campesinos, obreros, periodistas, sacerdotes, expertos y ministros discutieron durante dos días los puntos más importantes de esa nueva propuesta, la primera que toma el tema del narcotráfico como un asunto integral y complejo. El acuerdo más importante es que toda política antinarcóticos debe ser nacional y no fruto de presión extranjera y que se debe mostrar afuera que se deben compartir responsabilidades en esta lucha. Bolivia deberá desplegar una diplomacia que le permita despenalizar el uso de la coca pues coca no es cocaína como tampoco la uva es el vino. El desafío es inmenso. El primer rechazo a este planteamiento lo adelantó el embajador de EEUU, Charles Bowers. La coca está ilegalizada internacionalmente por la Convención de Viena.

Hacia el nuevo milenio

Bolivia es considerada junto con Haití el país más atrasado del continente. Su débil economía y su secular pobreza la colocan en gran desventaja frente a sus vecinos; se ha dicho que es un país inviable y hasta un general chileno propuso su «polonización». Los cambios que se implementan actualmente están recién en su primera fase. Todos son a mediano y largo plazo. Si fracasan, el resultado podría ser no sólo un gran retroceso, sino la imposibilidad de tener un espacio en el nuevo milenio. Pero para muchos Bolivia vive una nueva revolución, sin sangre ni traumas. El éxito de las reformas podrá poner al país en la vanguardia, en el ejemplo de un país con crecimiento económico y atención a las demandas sociales.

La Paz, septiembre de 1994 .

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 134, Noviembre–Diciembre de 1994, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**